RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL 78/2021
ACTOR Y RECURRENTE: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al **Ministro Luis María Aguilar Morales, instructor en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancias	Números de registro
<p>Oficio 529-III-DGACAA-DAA-(CPM)-29382 y anexos de Félix Federico Palma Valdés, Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Anexos:</p> <p>a) Copia certificada del nombramiento expedido el once de enero de dos mil diecinueve, por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a favor del promovente como Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.</p> <p>b) Copias certificadas de diversas constancias relacionadas con el presente asunto.</p>	17291
<p>Oficio 529-III-DGACAA-DAA-(CPM)-6091 y anexos de Félix Federico Palma Valdés, Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Anexos:</p> <p>a) Oficio No. DG 21 2008 de once de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).</p> <p>b) Copia certificada del nombramiento expedido el once de enero de dos mil diecinueve, por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a favor del promovente como Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.</p>	18120

Documentales depositadas el veintiocho de octubre y diecisiete de noviembre del año en curso, a través del buzón judicial y recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el uno y el diecisiete de noviembre de este año. **Conste.**

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

Agréguese al expediente, para que surtan efectos legales, los oficios y los anexos de cuenta, presentados por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien se tiene con la personalidad reconocida en autos, mediante los cuales **rinde el informe** solicitado en proveído de cuatro de octubre del año en curso; y manifiesta, por un lado, que no violó la suspensión concedida y, por otro, que existe imposibilidad material para cumplir con dicha medida cautelar.

Asimismo, se tiene al promovente reiterando **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, **autorizados** y **delegados**; y ofreciendo como pruebas las documentales que efectivamente acompaña a sus oficios, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. De igual forma, invocando los sitios de internet que refiere.

**RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE
DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021**

Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, párrafos primero y segundo¹, 31², 32, párrafo primero³, y 57, párrafo primero⁴, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 93, fracción VII⁵ y 305⁶ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del diverso 1⁷ de la citada ley.

Ahora bien, respecto al ofrecimiento de la prueba pericial económica en materia de coordinación fiscal, se desecha la referida prueba, con apoyo en las siguientes consideraciones:

Conviene tener presente que en el presente recurso de queja, el recurrente, se duele de lo siguiente.

*“[...] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la CPEUM) y 14, 15, 16, 17, 18, 55, fracción I, 57, 58, fracción U y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo de la Ley Reglamentaria), vengo a **INTERPONER RECURSO DE QUEJA** en contra de actos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que **VIOLAN LA SUSPENSIÓN** decretada por la esa [sic] H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 09 de julio del año en curso dentro del incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 78/2021.”.*

Asimismo, es importante destacar que, en el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de los actos impugnados en los siguientes términos:

*“Atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de los actos en él impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, **procede conceder la suspensión.**”*

¹ **Artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. [...].

² **Artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

³ **Artículo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. [...].

⁴ **Artículo 57 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Admitido el recurso se requerirá a la autoridad contra la cual se hubiere interpuesto para que dentro de un plazo de quince días deje sin efectos la norma general o acto que diere lugar al recurso o, para que rinda un informe y ofrezca pruebas. La falta o deficiencia de este informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le imponga una multa de diez a ciento ochenta días de salario. [...].

⁵ **Artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles.** La ley reconoce como medios de prueba: [...]

VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y [...].

⁶ **Artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁷ **Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO
DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021

Lo anterior es así, pues, de no otorgarse la medida cautelar se causaría una afectación de difícil o imposible reparación, no solo a la parte actora, sino sobre todo y principalmente a la población mexiquense en general, en tanto que la aplicación de los actos cuya constitucionalidad se cuestiona, entre otras consecuencias, disminuyen los recursos federales que corresponden al actor por concepto de participaciones y de aportaciones federales; lo que, finalmente, podría comprometer la regularidad en la prestación de los servicios públicos y los programas sociales a cargo del actor.

Esto se desprende de las manifestaciones del actor en su demanda, en el sentido de que: **“Cerca del 50% de las participaciones federales son utilizadas para el pago de nómina magisterial y de salud (53 mil 966 millones de pesos) y la pérdida de 4 mil 328 millones de pesos equivale a la nómina anual de 21,700 maestros de primaria. El fortalecimiento de los Sistemas de Salud se ha vuelto prioritario en estos momentos en que vivimos una crisis sanitaria global, la minusvalía que estimamos equivale al presupuesto anual para medicamentos del sector salud a 4 mil 800 millones de pesos. Esta reducción de recursos equivale, de igual manera, al 25% de los recursos totales anuales de la Secretaría de Seguridad Pública.”** [Énfasis añadido].

En tal sentido, dado que la sentencia estimatoria que llegara a dictarse no podría tener efectos retroactivos, por disposición de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución General y 45 de la Ley Reglamentaria de la Materia, se considera que, de no concederse la suspensión, se generaría un daño relevante a la entidad federativa y a su población.

Tal daño, cuya atención es de interés social y orden público, conduce a esta instrucción a conceder la medida cautelar a fin de evitar, no solo una afectación al derecho o el interés de la parte actora, sino principalmente evitar se le cause un daño relevante o irreparable a la sociedad mexiquense.

Consecuentemente, **se concede la suspensión** para el efecto de que se deje de aplicar la “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición (ENOEN). Cifras durante el Primer Trimestre de 2021”, así como los resultados de las encuestas subsecuentes, en lo relativo al Estado de México, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio principal. Por consiguiente, a partir de la presente resolución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá utilizar la “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el Cuarto Trimestre de 2020”, por ser la última publicada con anterioridad a la emisión de la encuesta impugnada, hasta en tanto se resuelva en lo principal la controversia constitucional.

De igual forma, **se concede la medida cautelar** para el efecto de suspender el uso del Censo de Población y Vivienda 2020, así como del Marco de Muestreo de Viviendas, al momento de elaborar las restantes Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes, en lo relativo al Estado de México, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio principal. Por consiguiente, a partir de la presente resolución, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el cálculo de la población del Estado de México, deberá aplicar la metodología empleada con anterioridad a la impugnada.

Así las cosas, la suspensión se concede en los términos ya precisados, a fin de salvaguardar la tutela jurídica respecto de la continuidad en el ejercicio de las funciones del gobierno de la entidad federativa actora, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto; máxime que, con esta medida, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se causa daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudieran obtenerse con ella, sino que, por el contrario, al otorgarla, únicamente se pretende tutelar provisionalmente el ámbito competencial del actor, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social y económica del país y preservando el normal desarrollo de la administración pública estatal y las obligaciones estatales que constitucional y

**RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE
DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021**

legalmente tiene encomendadas, así como los servicios públicos y los programas sociales a su cargo, en beneficio de la colectividad.”

De lo transcrito, se advierte que la materia del presente asunto se constriñe a determinar si hubo o no violación a la suspensión, eso es, si existió **contumacia de la autoridad en el cumplimiento del auto o resolución a través de la cual se otorgó la suspensión.**

De ahí que la **litis planteada** se constriñe a determinar si en principio, se acreditan en forma plena los actos en que -señala el recurrente- incurrió la autoridad responsable y, de ser así, si son violatorios de la suspensión otorgada por el Ministro instructor y, en su caso, determinar la responsabilidad de la autoridad que haya desatendido lo ordenado en el referido auto.

Por tanto, la materia de recurso de queja no se refiere a cuestiones, respecto de la cual sea necesaria la prueba pericial⁸ a efecto de esclarecer una cuestión técnica o científica, ya que el recurrente, reclama la violación a la suspensión decretada por esta instrucción.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone la prueba pericial económica en materia de coordinación fiscal, señalando el siguiente cuestionario:

“1. PARTICIPACIONES FEDERALES, EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES FONDOS:

1. *¿Que diga el perito cómo debe aplicar la fórmula [sic] prevista en la Ley de Coordinación Fiscal, para el cálculo [sic] de participaciones federales en relación con los citados fondos?*
2. *¿Que diga el perito si es posible modificar una variable de la fórmula contenida en la Ley de Coordinación Fiscal para el cálculo de participaciones federales en relación con los citados fondos?*
3. *¿Que diga el perito si el modificar una variable de la fórmula contenida en la Ley de Coordinación Fiscal, para el cálculo de participaciones federales en relación con los citados fondos, distorsiona su resultado?*
4. *¿Que diga el perito cuáles serían los efectos de modificarse la variable relativa a la información de población sólo respecto de una entidad federativa en el cálculo de participaciones federales en relación con los citados fondos?*
5. *¿Que diga el perito de qué forma impactaría a las 31 entidades federativas restantes el que se considere una información de población distinta de la que dio a conocer el INEGI, sólo respecto de una entidad, al momento de realizar el cálculo de las participaciones federales en relación con los citados fondos?*
6. *¿Que diga el perito de qué forma impactaría a las 31 entidades federativas restantes el que se considere la ENOE del cuarto trimestre de 2020 sólo para una entidad y la ENOE del primer trimestre de 2021, para el resto de las entidades federativas?*
7. *¿Que diga el perito cuál es la afectación a las 31 entidades federativas restantes, en los montos que recibirán de participaciones federales en relación con los citados fondos, si se inaplicara la ENOE del primer trimestre de 2021 y en su lugar se aplicará la ENOE del cuarto trimestre de 2020, sólo respecto de una entidad federativa?*
8. *¿Que diga el perito si es posible modificar la variable del dato de población*

⁸ Véase la tesis de rubro y texto siguiente: **“PRUEBAS. NO DEBEN ADMITIRSE SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA LITIS DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES O SI SE TRATA DE UNA CUESTIÓN DE DERECHO.** Cuando en las controversias constitucionales la litis consista en determinar si las reformas y adiciones a un reglamento van más allá de lo que dispone la ley que reglamenta, lo que se traduce en una cuestión de derecho, para dilucidar la litis planteada sólo es necesario la interpretación de la norma legal, lo que corresponde a este Alto Tribunal al emitir la resolución correspondiente. Por tanto, si las pruebas que una parte ofrece tienden a acreditar la cuestión anotada, o no guardan relación con la litis, ninguna trascendencia tendrían al resultado de la sentencia, por lo que la determinación del Ministro instructor de no admitirlas, resulta apegada a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia.”

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 637, registro 187717.

**RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO
DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021**

respecto de una sola entidad federativa, sin que ello implique que se tengan que desaplicar las fórmulas previstas en la Ley de Coordinación Fiscal para el cálculo de participaciones federales en relación con los citados fondos?

9. ¿Que diga el perito si se puede aplicar la fórmula con distorsión por haberse modificado la información de una variable solo para una entidad federativa, para el cálculo de las participaciones federales en relación con los citados fondos y en caso de respuesta afirmativa, cómo afectaría esto a las demás entidades federativas?

10. ¿Que diga el perito si el cumplimiento de la suspensión deriva en una afectación mayor a las 312 [sic] entidades federativas restantes, frente al beneficio que pudiera obtener la entidad actora?

II. APORTACIONES FEDERALES, EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES FONDOS:

1. ¿Que diga el perito cómo funciona la fórmula prevista en la Ley de Coordinación Fiscal, para el cálculo de aportaciones federales en relación con los citados fondos?

2. ¿Que diga el perito si es posible modificar una variable de la fórmula contenida en la Ley de Coordinación Fiscal para el cálculo de aportaciones federales, respecto de los citados fondos?

3. ¿Que diga el perito si el modificar una variable de la fórmula contenida en la Ley de Coordinación Fiscal, para el cálculo de aportaciones federales en relación con citados fondos, distorsionaría el resultado?

4. ¿Que diga el perito cuáles serían los efectos de modificar la variable relativa a la información de población solo respecto de una entidad federativa, en el cálculo de aportaciones federales en relación con los citados fondos?

5. ¿Que diga el perito de qué forma impactaría a las 31 entidades federativas restantes el que se considere una información de población distinta de la que dio a conocer el INEGI, sólo respecto de una entidad, al momento de realizar el cálculo de las aportaciones federales, respecto de los citados fondos?

6. ¿Que diga el perito cuáles son las afectaciones a las 31 entidades federativas restantes si el INEGI aplica una metodología para el cálculo de la población diversa a la vigente sólo respecto de una entidad federativa?

7. ¿Que diga el perito cuál es la afectación a las 31 entidades federativas restantes, en los montos que recibirán de aportaciones federales en relación con los citados fondos, si se inaplicara la ENOE del primer trimestre de 2021 y en su lugar se aplicará la ENOE del cuarto trimestre de 2020, solo respecto de una entidad federativa?

8. ¿Que diga el perito si existe imposibilidad de cumplimiento de la suspensión si se considerara en el cálculo de las aportaciones federales, en relación con los citados fondos, para el Estado de México una población que rebase el 100% del total de la población nacional publicada por el INEGI?

9. ¿Que diga el perito si es posible aplicar la fórmula con distorsión por haberse modificado la información de una variable solo para una entidad federativa, para el cálculo de las aportaciones federales, en relación con los citados fondos y derivado de este supuesto cuál sería la afectación a las demás entidades federativas?

10. ¿Que diga el perito si es posible rebasar el monto establecido para el reparto de aportaciones federales, en relación con los citados fondos, derivado de la modificación a una variable de la fórmula y en caso de que se rebase cuáles serían las implicaciones?"

De las preguntas del cuestionario que antecede, se advierte que están referidas al cálculo de las participaciones y aportaciones federales, así como la aplicación de las fórmulas para la obtención de los montos correspondientes a cada entidad federativa y su afectación en relación con la aplicación de la ENOE, por lo que se trata de cuestiones relacionadas con la interpretación y alcance de las normas federales que rigen en la materia de coordinación fiscal y, se indica, el

**RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE
DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021**

recurso de queja no puede tener por objeto discurrir sobre los alcances de la suspensión, ni sobre las razones que a juicio de la autoridad vinculada, subsisten para no dar cumplimiento.

Como puede advertirse, el medio probatorio ofrecido por la citada Secretaría no se relaciona con la inexistencia de los actos que se tildan como violatorios a la medida cautelar, lo que constituye un motivo para desechar válidamente la prueba.

De esta forma, se insiste, la **materia del recurso de queja** consiste en analizar si como lo acusa el recurrente, existe una posible violación del auto por el que se concedió la medida cautelar, pues que, de resolverse en sentido afirmativo, se deberán establecer las responsabilidades correspondientes y adoptar las acciones pertinentes para que sea sancionada a la infractora en los términos respectivos, por cuanto hace a la desobediencia imputada.

Atento a lo expuesto, contrario a lo que pretende acreditar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la referida pericial, el presente recurso de queja consiste en determinar si los actos llevados a cabo por las **autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento de la suspensión concedida**, pueden considerarse violatorios de la medida cautelar otorgada.

Así, tomando en consideración lo anterior y que el periodo probatorio sólo debe destinarse a la preparación y el desahogo de las pruebas que, efectivamente, tengan trascendencia en su resolución, a fin de evitar la demora innecesaria en el desarrollo del procedimiento, cuyo objetivo primordial es preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate, para que la sentencia que, en su caso se emita, declare el derecho de la parte actora y pueda ser ejecutada íntegramente, lo **procedente es desechar de plano la prueba pericial económica que ofrece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de coordinación fiscal**, de conformidad con lo previsto en el artículo 31⁹ de la invocada Ley Reglamentaria de la Materia y, por analogía, con apoyo en la tesis 2a. LIV/2005, de rubro siguiente: **"PRUEBAS EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO INSTRUCTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR LAS QUE CAREZCAN DE IDONEIDAD."**¹⁰.

Por otro lado, con copia simple del informe de cuenta, **córrase traslado al Poder actor y a la Fiscalía General de la República**, en la inteligencia de que los anexos presentados se encuentran disponibles para consulta en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

⁹ **Artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

¹⁰ **De texto siguiente: "PRUEBAS EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO INSTRUCTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR LAS QUE CAREZCAN DE IDONEIDAD. Del artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el ofrecimiento de pruebas tiene como limitante el que guarden relación con la controversia constitucional o que influyan en la sentencia definitiva, pues de lo contrario serán desechadas; sin embargo, no basta con que el medio de convicción ofrecido tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, sino que es necesario que esa prueba sea adecuada para que el juzgador conozca la verdad material de los hechos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual, si bien no está previsto en la ley citada, sí se contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable supletoriamente a dicha ley reglamentaria, en términos de su artículo 1o. En consecuencia, si se ofrece una prueba que no satisfaga ese requisito, resulta contraria a derecho y, por ende, el Ministro Instructor no está obligado a admitirla, en términos del referido artículo 31."**

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1211, registro 178360.

**RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO
DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021**

Lo anterior en el entendido de que, para asistir a la oficina que ocupa la citada Sección de Trámite¹¹, deberán tener en cuenta lo previsto en los artículos Noveno¹² y Vigésimo¹³ del *Acuerdo General de Administración número II/2020*.

Por la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282¹⁴ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la referida Ley Reglamentaria, **se habilitan los días y horas** que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído.

Finalmente, agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la impresión de la evidencia criptográfica de este proveído, en términos del Considerando Segundo¹⁵, artículos 1¹⁶ y 9¹⁷, del Acuerdo General Plenario 8/2020.

Notifíquese; por lista, por oficio, y mediante **MINTERSCJN** regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a la Fiscalía General de la República.

Por lo que hace a la notificación de la **Fiscalía General de la República**, **remítasele la versión digitalizada del presente acuerdo, así como la copia simple del informe de cuenta, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014**, a efecto de que, con apoyo en lo dispuesto en

¹¹ Acuerdo General de Administración número II/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintinueve de julio de dos mil veinte, por el que se establecen los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en este Alto Tribunal durante la emergencia generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19).

Dirección: Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Píno Suárez 2, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06065. Piso/Puerta: 1/2031

¹² Acuerdo General de Administración número II/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintinueve de julio de dos mil veinte, por el que se establecen los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en este Alto Tribunal durante la emergencia generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19).

Artículo noveno. El acceso a los edificios de la Suprema Corte será restringido y únicamente se permitirá la entrada a quienes se encuentren señalados en las listas que para tal efecto las áreas jurisdiccionales o administrativas hayan comunicado a las áreas competentes de seguridad y recursos humanos de la Suprema Corte, o bien, tengan cita programada para actividades jurisdiccionales conforme al procedimiento a que se refiere el artículo Vigésimo del presente Acuerdo General de Administración, así como quienes acudan al Buzón Judicial Automatizado del edificio sede de la Suprema Corte o a las oficinas de partes comunes ubicadas en otros edificios.

¹³ Acuerdo General de Administración número II/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintinueve de julio de dos mil veinte, por el que se establecen los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en este Alto Tribunal durante la emergencia generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19).

Artículo Vigésimo. Con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas y proteger la salud de aquellas que acuden a los edificios de la Suprema Corte, quienes requieran consultar expedientes o participar en diligencias jurisdiccionales, deberán solicitar una cita a través de la herramienta electrónica que para tal efecto se habilitará en el portal de Internet del Alto Tribunal. Asimismo, en el edificio Sede de la Suprema Corte se pondrá a disposición del público el equipo electrónico necesario para que los interesados puedan solicitar dicha cita.

Las personas que pretendan reunirse o entrevistarse con algún servidor público de la Suprema Corte solicitarán se gestione y agende una cita a través de correo electrónico a la dirección que para tal efecto se habilite en el directorio electrónico del Alto Tribunal.

¹⁴ **Artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

¹⁵ **Acuerdo general Número 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.**

Segundo. La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control constitucional a cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la información y de herramientas jurídicas ya existentes, como es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y

¹⁶ **Acuerdo general Número 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.**

Artículo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como en los recursos e incidentes interpuestos dentro de esos medios de control de la constitucionalidad; el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos y la celebración de audiencias y comparecencias a distancia.

¹⁷ **Acuerdo general Número 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.**

Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

**RECURSO DE QUEJA 5/2021-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE
DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021**

los artículos 4, párrafo primero¹⁸, y 5¹⁹ de la referida Ley Reglamentaria de la Materia, se lleve a cabo la diligencia de notificación a la referida autoridad, en su residencia oficial, de lo ya indicado; en la inteligencia de que la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, hace las veces del **oficio 8604/2021**, por lo que dicha notificación se tendrá por realizada una vez que se haya generado el acuse de envío respectivo en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Luis María Aguilar Morales**, quien actúa con **Carmina Cortés Rodríguez**, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

Esta hoja forma parte del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el **Ministro instructor Luis María Aguilar Morales**, en el recurso de queja **5/2021-CC**, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional **78/2021**, interpuesto por el Poder Ejecutivo del Estado de México. **Conste.**
JOG/DAHM/EAM

¹⁸ **Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica. [...].

¹⁹ **Artículo 5 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.